

15 DE DICIEMBRE 2019

La consulta nacional como un hecho político muy relevante

La reciente consulta ciudadana convocada por la asociación de municipalidades se constituyó en un hecho político muy relevante en primer lugar por la masiva participación de la ciudadanía, que evidencia un interesante proceso de re politización en un sector de la sociedad y una revitalización de las organizaciones sociales que incentivaron este proceso de consulta ciudadana, en donde participaron más de dos millones de chilenos.

Un inédito proceso que abre nuevos cauces de participación de la ciudadanía y que bien pudiera constituirse en un mecanismo permanente que les permita a las autoridades y representantes populares auscultar la opinión de la ciudadanía sobre los asuntos públicos sometidos a debates,

Es imperativo reconocer la iniciativa asumida por la mayoría de los alcaldes y concejales del país para convocar a esta consulta ciudadana, interpretando la aspiración de los chilenos y chilenas por una mayor participación en los asuntos públicos.

La masiva participación ciudadana en la consulta, a partir de sus categóricos resultados, muestra que la mayoría del país apoya la propuesta de una nueva constitución elaborada en democracia y se pronuncia por el mecanismo de una Asamblea o Convención constituyente elegida íntegramente.

Adicionalmente la consulta permitió conocer las prioridades de la ciudadanía en materia de demandas sociales, centradas en los temas de salud, educación y previsión social, además de una más justa distribución del ingreso que, tanto el gobierno como el conjunto de los actores políticos deben asumir como prioridades urgentes.

Y aunque la consulta ciudadana no es vinculante, refuerza la trascendencia y relevancia del acuerdo por una nueva constitución suscrito por un amplio arco de fuerzas políticas el pasado mes de noviembre. Incluyendo el plebiscito de entrada, que deberá ratificar si la mayoría de los chilenos se inclina por una nueva constitución y resolver en torno a su mecanismo de elaboración y el órgano que debe elaborarla.

Corresponderá al parlamento decidir cómo se asegura una adecuada representación de género y de los pueblos originarios, además de posibilitar la participación de independientes y de los chilenos en el exterior en este proceso constituyente.

La incapacidad del gobierno para tener un diseño que permita enfrentar la crisis social de manera integral

Luego de dos meses del estallido social que conmovió al país, el gobierno aún no logra tener un adecuado diseño que permita enfrentar la crisis de maneras integral. Su insistencia en privilegiar una agenda centrada en medidas de orden y seguridad (ley en contra de encapuchados, contra las barricadas. Incremento de penas a saqueadores, el que baila pasa, etc.) , sin asumir la urgente necesidad de dotar de contenidos sustantivos y suficientes al pacto por una mayor justicia social, con medidas de corto, mediano y largo plazo, muestran que aún no logra dimensionar la profundidad de la crisis que sacude al país.

Sin lugar a dudas el gobierno y el país enfrentan una situación muy compleja. La imagen internacional del país ha sido severamente afectada no tan sólo por la ola de violencia que ha acompañado a las movilizaciones sociales, con una severa afectación a la propiedad pública y privada.

La imagen internacional del país ha sido principalmente afectada por severos informes de organismos internacionales como Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y los enviados de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, confirmando graves y generalizadas violaciones y abusos a los derechos humanos, así como el uso excesivo de la fuerza para reprimir manifestaciones pacíficas de la ciudadanía.

De igual manera, la crisis ha permitido desnudar las debilidades de una institucionalidad que no tan sólo arrastra ilegitimidad de origen sino también una impronta extremadamente conservadora y creciente incapacidad para procesar las nuevas demandas ciudadanas, así como los problemas que genera un modelo de desarrollo concentrador, que mantiene las desigualdades y posibilita los abusos en contra de ciudadanos y consumidores, sin ofrecer adecuados marcos de protección social.

Chile enfrenta la crisis social más significativa desde la recuperación de la democracia y la inmensa mayoría del país demanda cambios y rectificaciones de fondo y no meros cambios cosméticos o de mínimos. El país no enfrenta una guerra ni menos a enemigos externos que promuevan la insurgencia o la rebelión. Enfrenta justas demandas de cambios y transformaciones a los que tanto el gobierno como el sistema político están obligados a abrir un cauce institucional y darles adecuadas respuestas. De poco o nada sirve intentar negociar a cuenta gotas u ofrecer acuerdos de mínimos para intentar salvar todo lo que sea rescatable del orden en crisis. O buscar aprobar medidas legislativas, a menudo inconducentes o controversiales, de manera exprés y que no apuntan a los problemas centrales que enfrenta el país.

Al acuerdo por una nueva constitución, es imprescindible añadir un nuevo pacto político, económico y social que plasme una voluntad de cambios y explicita una verdadera hoja de ruta reformista a la que ha aludido el ministro de Hacienda.

No son pocos los que, con sobradas razones, afirman que este gobierno y sectores muy importantes de su propia coalición, no tienen la voluntad o convicción para hacer este giro y liderar este proceso de transformaciones que la inmensa mayoría del país demandad

Pero nadie puede llamarse a engaño. El estallido social, las masivas y sostenidas movilizaciones registradas durante estos 60 días a lo largo del país, incluyendo la concentración de un millón doscientos mil personas en la capital y cientos de miles en el país, así como los dos millones y medio de personas que habrían participado en la reciente consulta ciudadana, marcan un antes y un después.

Resulta ilusorio pensar que el país volverá a la calma y retornará a la normalidad que existía antes del 18 de octubre sino se asumen las justas demandas ciudadanas, se abra un cauce institucional para procesarlas y se plasme una clara voluntad rectificatoria y de cambios en el rumbo del país. Si no se cumplen estos supuestos, lo más probable es que el país enfrente mayores turbulencias en un futuro muy próximo.

Los matices y diferencias que dividen las opiniones tanto en el oficialismo como en la oposición

En medio de la crisis, el gobierno ha enfrentado las críticas cruzadas de sus propios partidarios o cercanos, entre quienes postulan mano dura y palo largo para reprimir las manifestaciones sociales y enfrentar hechos de violencia y aquellos que se abren a los cambios y buscan el diálogo y los acuerdos para dar salida política a la crisis social.

No son pocos los dirigentes del oficialismo que, en sordina, critican la errática conducción de Sebastián Piñera e insisten en que se requieren cambios estructurales al actual modelo de desarrollo, en abierta contradicción con aquellos que insisten en la idea de que hay que gobernar con ideas propias, sin ceder a las presiones de la calle o de la oposición.

Un importante sector de la derecha, no tan sólo la UDI sino también un sector de Renovación Nacional, no es partidaria de redactar una nueva constitución que parta con una hoja en blanco, como reza el acuerdo suscrito. Apenas se muestra partidaria de introducir nuevas (y mínimas) reformas a la actual constitución. Y desde luego es refractaria a todo proceso de cambios y rectificaciones del modelo económico.

Tampoco las cúpulas empresariales parecen demasiado contentas con el manejo del gobierno del conflicto social. Preocupados por el severo daño a la imagen internacional del país, el clima de violencia y los graves daños a la infraestructura productiva y el nocivo impacto en la economía, demandan un pronto restablecimiento del orden y retorno a la normalidad.

Tampoco en la oposición parecieran existir consensos sustantivos en torno al acuerdo por una nueva constitución (que no fuera suscrito por el PC y sectores del Frente Amplio), como tampoco respecto de una agenda social que enfrente y entregue propuestas a las principales demandas ciudadanas que aparecen como prioridades en las encuestas, la reciente consulta ciudadana y las demandas expresadas por la Mesa de Unidad Social, que reúne a un vario pinto arco de movimientos y organizaciones sociales de muy diversas representatividad.

Chile vive un momento re fundacional que interpela a los actores políticos y sociales

Tras el estallido social, el país vive un verdadero momento re fundacional que interpela no tan sólo a los actores políticos de gobierno y oposición sino también a los actores sociales, agentes económicos y al país en su conjunto.

La forma como cada uno de estos actores enfrenta la actual coyuntura determinara su futuro. El intenso proceso político y electoral que vivirá el país a partir del año próximo bien pudiera modificar sustancialmente el mapa político del país y no necesariamente en un sentido progresista.

La reciente consulta ciudadana mostró una gran participación, concentrada en comunas urbanas, sectores de clase media y alta, con menor participación juvenil y popular, que mayoritariamente demandan cambios y transformaciones antes que la restauración de un orden severamente cuestionado.

Falta por dilucidar si ellos representan a la mayoría del país. Más allá de sus diferencias, la derecha y los sectores más conservadores no viven el mismo proceso de disgregación que muestran los llamados sectores progresistas. Diversas encuestas muestran que una gran mayoría ciudadana no se reconoce en las tradicionales opciones de derecha, centro o izquierda, sino todo lo contrario, con un generalizado rechazo o escasa valoración de los partidos y las instituciones. Sin lugar a dudas esa desafección, disgregación y dispersión tiende a favorecer a los partidarios del orden, aunque estos sectores deban adoptar la estrategia gatopardista de que todo cambie para que todo siga igual.